TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C..
SALA DE FAMILIA

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

**REF: PROCESO DE SUCESIÓN DE CLARA INÉS GARCÍA ÁLVAREZ
(INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS) (AP.
AUTO).**

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado 31 de Familia de esta ciudad, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

El que fuera el apoderado del señor HUMBERTO OLACHEA SÁNCHEZ promovió incidente de regulación de honorarios en contra de este, actuación a la cual la Juez del conocimiento le dio trámite y que culminó con la condena a pagar, por parte del mencionado, la suma de \$3.869.184, decisión con la cual el citado se mostró inconforme y la atacó en reposición y, en subsidio, en apelación y, siéndole adversa la primera, se le concedió la segunda, la cual pasa, enseguida, a desatarse.

CONSIDERACIONES

El trámite incidental propuesto está previsto en el artículo 76, inciso 2º, del C.G. del P., cuyo tenor literal es como sigue:

“El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral”.

La anterior disposición legal permite, tal como se desprende de su texto, que el procurador judicial a quien se le revoca el poder pueda conseguir la regulación de sus honorarios, mediante incidente, por el mismo juez ante el cual adelantó su gestión, en clara protección de los intereses de los profesionales del derecho, que se ven expuestos a una intempestiva terminación del mandato que se les había conferido, sin que tengan que acudir, eventualmente, a otro proceso para la consecución de aquel fin (cfr. JAIRO PARRA QUIJANO, “Derecho Procesal Civil”, T. I, Ed. Temis, Santafé de Bogotá, 1992, p. 223).

En el presente caso, es claro que se cumplen los presupuestos señalados por la H. Corte Suprema de Justicia, en auto de 31 de mayo de 2010, M.P.: doctor WILLIAM NAMÉN VARGAS, para promover el incidente de regulación de los estipendios, pues se pudo constatar que el poder le fue revocado al incidentante, el 9 de marzo de 2022 (cfr. arch. 42, cuad. ppal., exp. digital), revocatoria que fue aceptada por auto de 22 de los mismos mes y año (arch. 48 ibídem); asimismo, el a quo era competente para tramitar la regulación de honorarios, al conocer del proceso de sucesión de CLARA INÉS GARCÍA ÁLVAREZ, en el que el abogado actuó como mandatario judicial de don HUMBERTO OLACHEA SÁNCHEZ; igualmente, se cumple lo relativo a la legitimación en la causa para promover dicho trámite, porque el incidentante sí fue el procurador judicial del mencionado y, posteriormente, se le revocó el poder; finalmente, el escrito contentivo de la solicitud de fijación de los honorarios causados por la representación judicial, se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación, por estado, del auto que admitió la revocatoria del poder.

En el presente caso, no se esgrime la existencia de alguna cláusula en la que se regularan los honorarios profesionales del abogado que representó al incidentado, de suerte tal que es menester acudir al criterio señalado en la disposición transcrita para tasarlos, esto es, que se debe tener en cuenta, lo que, para la fijación de las agencias en derecho, trae el mismo código (num. 4 art. 366), que remite a las tarifas establecidas por el H. Consejo Superior de la Judicatura, amén de tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el respectivo abogado, al igual que la cuantía del proceso, principios estos previstos en el numeral 4 del artículo 366 del C.G. del P..

En tal sentido, la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado, en doctrina aplicable aún hoy:

“...el inciso 1° del numeral 3° del artículo 393 ibídem, alusivo a la fijación de agencias en derecho, y que es aplicable por analogía legis a la regulación de honorarios, sirve de guía para la resolución de asuntos como el que ocupa la atención de la Sala, pues hace referencia a los aspectos relevantes de la actividad profesional realizada por un abogado al tramitar un proceso y señala los límites para llevar a cabo la fijación de esa remuneración, sin que pueda resultar suficiente referencia el solo contrato celebrado entre las partes, puesto que allí no se contempló el evento de la revocatoria del poder y sus consecuencias en punto de la tasación de los honorarios.

“Tales criterios legales tienen en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la actuación realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, todas ellas encaminadas a establecer los valores correspondientes a la contraprestación que los abogados merecen recibir como pago por sus servicios, cuántum que, según el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil ‘no podrá exceder el valor de los honorarios pactados’, es decir, que el fallador al regular el monto correspondiente no podrá rebasar el máximo estipulado, pero sí podría ser inferior en función, básicamente, de lo mucho o poco que hubiese faltado para la culminación de

la labor encomendada” (auto de 8 de marzo de 2011, M.P.: doctor ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ).

Consultado el acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por la Sala Administrativa del H. Consejo Superior de la Judicatura, vigente en la época en que se inició el incidente, se observa que la tarifa máxima de agencias en derecho prevista para los procesos liquidatorios en primera instancia, como es el caso de la mortuoria de la referencia, corresponde a entre el 3% y el 7.5% de las objeciones a los inventarios y avalúos del valor definitivo de los activos (artículo 5º, numeral 5.1), lo que debe aplicarse con los criterios antes mencionados, para establecer el valor de los honorarios adeudados al incidentante.

Analizado lo ocurrido en el proceso, se concluye que el promotor de la actuación accesoria, ciertamente, tuvo una discreta intervención en el proceso, lo cual no significa, en modo alguno, que no merezca el reconocimiento de sus honorarios, pues también puede verse que, durante el tiempo que llevó la representación del incidentado, aunque no hubo mayor actividad en la mortuoria, la sola vigilancia de la litis la supone, sin que haya alguna decisión adversa al incidentado que ameritara su intervención, pues en el periodo en que fungía como mandatario, en realidad, no se produjeron sino la remisión de unos oficios y el reconocimiento de algunos interesados, entre ellos, unos representados por la misma procuradora actual de don HUMBERTO (cfr. archs. 22 a 42 del exp. digital), sin que, por ello, pueda predicarse que aquella no desplegó labor significativa que merezca remunerarse por sus mandantes.

En consecuencia, en ejercicio del arbitrium judicis, no resultan exagerados los honorarios a cargo del incidentado, esto es, \$3.869.184, por la gestión que desarrolló el apoderado, hasta antes de presentarse la revocatoria del mandato judicial, teniendo en cuenta que el máximo fijado para estos casos, como ya se dijo, es del 7.5% del valor de los activos, el cual asciende, en esta mortuoria a \$1.925.353.000, del que le correspondería a don HUMBERTO la mitad, esto es, el 50%, a título de gananciales.

En las anteriores condiciones, lo procedente es confirmar el auto apelado, sin más consideraciones, por no ser ellas necesarias.

Por lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., EN SALA DE FAMILIA DE DECISIÓN,**

RESUELVE

1º.- **CONFIRMAR**, en lo que fue objeto del recurso, el auto apelado, esto es, el de 7 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado 31 de Familia de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia.

2º.- **COSTAS** a cargo del apelante, por no haber prosperado el recurso.
Tásense por el a quo e inclúyase como agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.).

3º.- Ejecutoriado este auto, devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS
Magistrado

PROCESO DE SUCESIÓN DE CLARA INÉS GARCÍA ÁLVAREZ (INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS) (AP. AUTO).

Firmado Por:

Carlos Alejo Barrera Arias

Magistrado

Sala 002 De Familia

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cde1f35da4e6ebfebd99f9d904cc731275d5c97657b8060bedde299d2ea4b4d5**

Documento generado en 13/12/2023 09:09:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>